

**Asamblea General**

Distr. general
14 de enero de 2014
Español
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 67º período de sesiones
(26 a 30 de agosto de 2013)**

Nº 32/2013 (Arabia Saudita)

Comunicación dirigida al Gobierno el 27 de junio de 2013

Relativa a Khaled Al-Omeir

El Gobierno no respondió a la comunicación dentro del plazo de 60 días.

El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42, que prorrogó y especificó el mandato del Grupo de Trabajo en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/16/47, anexo), el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno la comunicación arriba mencionada.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de

GE.14-10276 (S) 270114 270114



* 1 4 1 0 2 7 6 *

Se ruega reciclar



Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, o discapacidad u otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los derechos humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

3. El caso que se menciona a continuación fue comunicado al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria como sigue.

4. El Sr. Khaled Al-Omeir (en adelante, el Sr. Al-Omeir), nacido en 1970, es nacional de la Arabia Saudita y reside en Hay Al Badr, en Riad (Arabia Saudita). Está casado y tiene tres hijos. Es miembro del movimiento reformista y defensor de los derechos humanos.

5. El 1 de enero de 2009, alrededor del mediodía, el Sr. Al-Omeir fue detenido por los servicios de seguridad sauditas (Al Mabahith) en Riad tras la celebración de una manifestación supuestamente pacífica ese mismo día por varios defensores de los derechos humanos que protestaban contra el bombardeo israelí de civiles que había tenido lugar en Gaza en diciembre de 2008. No se sabe si se le mostró una orden de detención. Posteriormente fue encarcelado en la prisión de Al Hayr, donde sigue recluso.

6. La fuente alega que la privación de libertad del Sr. Al-Omeir resultó directamente del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica garantizado por los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La fuente señala que el Sr. Al-Omeir abogó públicamente por una reforma institucional en la Arabia Saudita y publicó sus opiniones en Internet y en diferentes medios de comunicación. Proporcionó a organizaciones no gubernamentales internacionales información sobre violaciones de los derechos humanos, en particular sobre torturas en prisiones sauditas.

7. Según la fuente, el Sr. Al-Omeir había sido detenido anteriormente, el 25 de abril de 2005, tras una entrevista con el canal de televisión Al Jazeera en la que expresó su opinión sobre la situación política en la región. Permaneció recluso seis meses en la prisión de Al Alich, donde presuntamente fue maltratado. Posteriormente fue puesto en libertad sin que mediara ninguna actuación legal.

8. El 21 de enero de 2009, el Grupo de Trabajo, así como los Relatores Especiales sobre la independencia de los magistrados y abogados, sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, enviaron un llamamiento urgente conjunto sobre el caso del Sr. Al-Omeir.

9. El 8 de septiembre de 2009, el Gobierno de la Arabia Saudita respondió al llamamiento urgente afirmando que el Sr. Al-Omeir había sido detenido, acusado de un delito relacionado con la seguridad, por lo que debía permanecer recluso para ser interrogado. El Gobierno garantizó que el caso del Sr. Al-Omeir sería sometido a los tribunales y que este seguiría recibiendo un trato acorde con la normativa judicial de la Arabia Saudita, que exige el respeto del derecho internacional de los derechos humanos.

10. La fuente sostiene que la privación de libertad del Sr. Al-Omeir es arbitraria, puesto que carece de fundamento jurídico. Señala que, en contra de lo dispuesto en los artículos 35 y 114 de la Ley de procedimiento penal de la Arabia Saudita (Real Decreto N° M/39), no se notificaron oficialmente al Sr. Al-Omeir los cargos formulados en su contra y estuvo en prisión preventiva dos años y cuatro meses (de enero de 2009 a mayo de 2011) antes de comparecer ante un juez.

11. El 15 de mayo de 2011, el Tribunal Penal Especial de Riad vio la causa del Sr. Al-Omeir. El Sr. Al-Omeir fue declarado culpable de "participar en una reunión ilegal" y de "publicar información en Internet" y fue condenado a una pena de ocho años de prisión sin posibilidad de recurso.

12. La fuente sostiene que, en contravención de los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 4 del Real Decreto N° M/39, el Sr. Al-Omeir fue privado de su derecho a un juicio imparcial por las siguientes razones: se le denegó el acceso a un abogado, su juicio no fue público, no tuvo oportunidad de recurrir la sentencia, el Tribunal Penal Especial de Riad está sometido al control directo del Ministerio del Interior y las acusaciones formuladas contra el Sr. Al-Omeir no justifican que su caso se someta a la competencia de un Tribunal Especial.

13. Por las razones expuestas, la fuente sostiene que la privación de libertad del Sr. Al-Omeir es arbitraria y se inscribe en las categorías I, II y III de los criterios del Grupo de Trabajo para la investigación de casos individuales.

Respuesta del Gobierno

14. El Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno el 27 de junio de 2013 y le pidió que facilitara información sobre la situación del Sr. Al-Omeir. Lamentablemente, el Gobierno no ha respondido a la presente comunicación.

15. A este respecto, cabe señalar que el Sr. Al-Omeir fue objeto de un llamamiento urgente dirigido al Gobierno de la Arabia Saudita el 19 de enero de 2009 por el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

16. El Gobierno respondió al llamamiento urgente el 8 de septiembre de 2009 indicando que: "A este respecto, las autoridades competentes del Reino de la Arabia Saudita han señalado que la persona mencionada fue detenida por un delito relacionado con la seguridad que requería su reclusión para su interrogatorio. Será llevada ante un juez para determinar las medidas legales que deban tomarse en su contra. A lo largo de todo el período de reclusión, ha recibido un trato acorde con la normativa judicial de la Arabia Saudita, basada en la *sharia* islámica, que exige el respeto de los derechos humanos y de los pactos y convenciones internacionales aplicables".

Deliberaciones

17. Pese a la respuesta al llamamiento urgente sobre la privación de libertad del Sr. Al-Omeir, este permanece encarcelado dos años después. A falta de una respuesta del Gobierno y sobre la base de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo puede emitir una opinión a la luz de la información que se le ha presentado.

18. El Grupo de Trabajo considera que, si el Gobierno decide no refutar las alegaciones, cabe aceptar la información de la fuente como fiable.

19. El Grupo de Trabajo ha examinado numerosos casos y emitido opiniones sobre la detención y reclusión de manifestantes, activistas y defensores de los derechos humanos y partidarios de la reforma del sistema de gobierno de la Arabia Saudita. Esas detenciones y reclusiones se han producido en respuesta a una protesta contra un determinado incidente (en el presente caso, la participación del Sr. Al-Omeir en una manifestación pacífica contra la matanza de civiles en Gaza por bombardeos israelíes), como represalia por reclamar una reforma o contra activistas o defensores de los derechos humanos (como en las opiniones N^{os} 36/2008 y 10/2011).

20. El Grupo de Trabajo también ha emitido opiniones en muchos de los casos en que no se han respetado todos los elementos del derecho a un juicio imparcial, entre otras cosas por la larga duración de una reclusión en régimen de incomunicación o de una detención preventiva, por la falta de una orden de detención o por la imposibilidad de contactar a un abogado o de recurrir una sentencia condenatoria (por ejemplo, las opiniones N^{os} 2/2011, 17/2011, 18/2011, 19/2011 y 31/2011).

21. En el caso que el Grupo de Trabajo tiene ante sí hay varias infracciones manifiestas de instrumentos de derechos humanos vigentes, así como del ordenamiento jurídico saudita, en particular la detención y reclusión sin orden judicial y sin informar de los motivos de dicha detención y reclusión.

22. De conformidad con el artículo 36 de la Ley fundamental de gobernanza de la Arabia Saudita, el "Estado velará por la seguridad de todos los ciudadanos y todas las personas que residan en su territorio. Nadie será recluso, detenido o encarcelado sino en los casos y la forma que las leyes prescriban". Asimismo, el artículo 35 de la Ley de procedimiento penal de la Arabia Saudita (Real Decreto N^o M/39) dispone que "toda detención deberá practicarse en razón de una orden de la autoridad competente". Ese artículo especifica además que: "se informará también a esa persona de las razones de su detención". El artículo 2 de la Ley dispone que "la duración de la detención (...) será fijada por la autoridad competente". El Sr. Al-Omeir no pudo beneficiarse de estas disposiciones del derecho interno.

23. El derecho saudita exige que, tras la detención, la prisión preventiva sea de la menor duración posible. El artículo 114 de la Ley de procedimiento penal de la Arabia Saudita dispone que la duración de la prisión preventiva no podrá superar los cinco días, si bien podrá prorrogarse hasta un total de seis meses. Sin embargo, la prisión preventiva del Sr. Al-Omeir superó con creces ese plazo, puesto que se prolongó durante dos años y cuatro meses (de enero de 2009 a mayo de 2011).

24. El derecho a un juicio justo, rápido e imparcial y el derecho a la asistencia de un abogado forman parte integrante de las debidas garantías procesales previstas en los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos derechos le han sido denegados al Sr. Al-Omeir y no se le ha permitido solicitar el *habeas corpus* ni acogerse a su derecho a defenderse a sí mismo.

25. El Sr. Al-Omeir fue condenado a una pena de ocho años de prisión por un Tribunal Especial, sin posibilidad de recurso ante un tribunal superior, por cargos presentados en su contra por ejercer su libertad de expresión y de reunión pacífica garantizada por los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

26. El Grupo de Trabajo observa con preocupación la aparición en la Arabia Saudita de un cuadro persistente de detenciones y reclusiones arbitrarias, así como la falta de respuesta de las autoridades, que no hacen uso de la posibilidad de responder a las denuncias de detención arbitraria presentadas a este Grupo por la fuente. A modo de ejemplo, el Grupo hace referencia a sus opiniones N^{os} 22/2008, 36/2008, 37/2008, 21/2009, 2/2011, 10/2011, 17/2011, 18/2011, 19/2011, 31/2011, 8/2012 y 22/2012. Cabe por ello señalar que el Grupo

de Trabajo considera que el presente caso es sumamente preocupante, puesto que no se respetan derechos humanos fundamentales.

Decisión

27. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emite la siguiente opinión:

- La privación de libertad del Sr. Al-Omeir es arbitraria y se inscribe en las categorías I, II y III del Grupo de Trabajo por cuanto carece de fundamento jurídico y contraviene los artículos 8, 9, 10, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
- El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de la Arabia Saudita que ponga en libertad de inmediato al Sr. Al-Omeir y ajuste su situación a las prescripciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos;
- Por consiguiente, y habida cuenta de los perjuicios ocasionados por esta detención y reclusión contrarias a derecho, el Sr. Al-Omeir debería recibir una reparación adecuada;
- El Grupo de Trabajo recuerda al Gobierno que, de conformidad con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos¹, las leyes y las medidas que los Estados adopten para combatir el terrorismo deben estar en consonancia con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos;
- El Grupo de Trabajo también recuerda la resolución 15/18² del Consejo de Derechos Humanos, en que se hace un llamamiento "a todos los Estados a cooperar con el Grupo de Trabajo y a considerar seriamente la posibilidad de aceptar cuando solicite hacer una visita, a fin de que el Grupo pueda desempeñar su mandato de manera aún más eficaz";
- El Grupo de Trabajo alienta al Gobierno de la Arabia Saudita a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[Aprobada el 30 de agosto de 2013.]

¹ Resolución 7/7 del Consejo de Derechos Humanos.

² Párrafos 3, 4 a) y 9.